

MEDIDA PROVISIONAL.

Honorables

MAGISTRADOS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO (REPARTO)

Correo electrónico: sectribadmcnare@cendoj.ramajudicial.gov.co

Yopal-Casanare

E. S. D.

Referencia: **ACCION DE TUTELA**

Accionante: **LUZ DARY BECERRA BARRERA**

Accionado: **CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOYACÁ Y CASANARE
Y JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE**

ASUNTO: ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL

LUZ DARY BECERRA BARRERA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.143.901, obrando en nombre propio, por medio del presente escrito y con fundamento en el Art. 86 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto Reglamentario 2591 de 1991, me permito solicitar ante Usted, mediante esta acción de tutela, la protección a mis derechos fundamentales al MÍNIMO VITAL, al TRABAJO, a la SALUD y LA SEGURIDAD SOCIAL, al DEBIDO PROCESO y a la FAMILIA, vulnerados por el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOYACÁ Y CASANARE y el JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE, con base en los siguientes:

HECHOS

1. Soy Servidora Judicial de la Rama Judicial desde hace 30 años, y he laborado en diferentes despachos judiciales de Casanare y Arauca, como escribiente, oficial mayor, secretaria y Juez.
2. En la actualidad me desempeño como secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Támara – Casanare, nombrada mediante Resolución No. 11 del tres (3) de octubre de 2024.
3. Soy nacida en Támara Casanare, este a su vez es el municipio donde tengo mi núcleo familiar, mi puesto de trabajo y donde he desarrollado la mayor parte de mi vida. Este es en definitiva mi lugar de arraigo.
4. A la fecha cuento con 54 años de edad, y presento las siguientes patologías:
 - PACIENTE ONCOLÓGICA, con diagnóstico de tumor maligno recto Código C20X y con citas de control cada tres meses, lo que me convierte en sujeto de especial protección por tratarse de una enfermedad de alto costo.
 - Diagnóstico de OCLUSIÓN VASCULAR DE LA RETINA ANTIGUA en ojo derecho. (Disco 0.5 macula alteraciones del EPR, en polo posterior, hay aparente cambio por infarto / oclusión coroidea) con orden de medico tratante para uso de medicamentos de uso permanente y controles.
5. Por las patologías presentadas me encuentro a la fecha en proceso de asignación de cita en el Instituto Nacional de Cancerología de la ciudad de Bogotá, el cual debería haber asistido a finales de abril del presente año, pero hasta la fecha ha sido difícil tener cita.

6. El Juzgado Promiscuo Municipal de Támara conoce de mi situación médica, habida cuenta que ante el titular del Despacho he tenido que solicitar mis permisos para asistir a mis diferentes citas médicas de control oncológico, viajes que son cubiertos con mi salario.

7. En el momento cuento con 1.639 semanas cotizadas en Colpensiones, y a tres años de cumplir la edad requerida para acceder a mi pensión, por lo que en la actualidad aun no puedo acceder a mi mesada pensional por vejez.

8. Soy deudora ante el Grupo Juriscoop, pues adquirí un crédito con dicha entidad financiera la cual no se ha pagado en su totalidad, y del cual aportó el correspondiente soporte que da cuenta de la existencia de la obligación crediticia.

9. Teniendo en cuenta que la verificación constante del correo electrónico del juzgado es una de mis funciones, llegue a conocer que mediante mensaje de datos del 14/05/2025, con oficio CSJBOYO25-2266, de fecha 12 de mayo de 2025, la presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, le notifica al señor Juez Promiscuo Municipal de Támara, el Acuerdo CSJBOYA24-166 del 26 de noviembre de 2024, destinada a proveer el cargo de Secretario de Juzgado Municipal – Nominado, el cual se encuentra en vacancia definitiva. Cargo que actualmente desempeño.

10. En la Resolución en cita, adjuntan la lista de personas a proveer dicho cargo, cosa que no está en discusión, y por ende mi nombramiento en provisionalidad en este puesto de trabajo se encuentra amenazado, pues corro el riesgo cierto de ser desvinculada de mi cargo y quedar sin las garantías mínimas de subsistencia económica.

11. Las entidades accionadas, con la notificación de la lista de eliges y el inminente nombramiento de una persona en carrera judicial en mi puesto de trabajo, amenazan mi estabilidad laboral, y ponen en riesgo mis ingresos monetarios, pues es de mi labor como secretaria que obtengo el dinero que me permite subsistir, pagar el crédito contraído, mantener mi afiliación al régimen de salud y seguridad social que garantiza mi continuidad en el tratamiento oncológico por el diagnostico de “*tumor maligno de recto*” y por el cual me veo obligada a viajar cada tres meses para los respectivos controles.

13. En caso tal que perdiera mi trabajo por el nombramiento en propiedad mi vida, salud y mínimo vital se verían gravemente afectados, máxime cuando la enfermedad que padezco, al tratarse de cáncer, es una enfermedad catalogada de alto costo, y debe ser continuamente monitoreada, tal y como se puede verificar en los anexos de mi historia clínica expedida por el especialista en Oncología y Gastroenterología Oncológico.

12. En mi consideración, debido a la enfermedad que me ha sido diagnosticada, los controles médicos constantes que requiero y los costos que aquella representa me convierten en sujeto de especial protección constitucional.

13. Al no reunir aun los requisitos para lograr mi pensión de vejez, una desvinculación laboral en este momento representaría una grave afectación a mi mínimo vital, pues reitero, de mi trabajo percibo mi único ingreso, y debido a mi edad y patologías, difícilmente podría reubicarme en otro puesto de trabajo lo que inevitablemente representaría una desvinculación del sistema de seguridad social en salud.

14. Ante estas circunstancias acudo a la acción constitucional con el fin de que se me protejan mis derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, debido proceso

hasta tanto logre cumplir con la totalidad de requisitos para acceder a una pensión por vejez, y se realicen todos los trámites y /o solicitudes de inclusión en la nómina de pensionados, con el fin de evitar así un daño irremediable por daño emergente y lucro cesante.

15. Es importante señor Juez, que se revise de fondo la protección al MÍNIMO VITAL pues dependo de este ingreso mensual y no cuento con ingresos adicionales para poder solventar mis gastos (Salud, Alimentación, Vivienda, Vestuario, y pago de un crédito a Financiera Juriscoop, etc), lo que al estar desvinculada de la Rama Judicial y en edad de prepensión desmejoraría mi condición de vida, porque, el pago de mis gastos personales mensuales, como el hecho de viajar a cumplir cada tres meses a la ciudad de Bogotá a mis controles de mi enfermedad y obligaciones bancarias asumidas con anterioridad.

16. En mi caso se configura un riesgo de perjuicio irremediable ante mi eventual desvinculación laboral, por lo que, si bien existen mecanismos ordinarios de defensa judicial, aquellos se tornan ineficaces para lograr la efectiva protección de mis derechos fundamentales, habida cuenta que los mecanismos diferentes a la acción de tutela se demoran en el tiempo y en mi caso requiero una protección efectiva, rápida y que impida que sea desvinculada como secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Támara.

MEDIDA PROVISIONAL

Solicito muy respetuosamente, en tanto se tramita la presente acción de tutela y se decida de fondo el presente caso y para evitar un perjuicio irremediable de afectación del mínimo vital, se ordene al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOYACÁ Y CASANARE y principalmente al JUZGADO PROMISCO MUUNICIPAL DE TAMARA CASANARE, la suspensión inmediata del Acuerdo CSJBOYA24-166 del 26 de noviembre de 2024, y en sí, del proceso destinado a proveer el cargo de Secretario del Juzgado Municipal – Nominado, para así evitar un daño irremediable.

Lo anterior teniendo en cuenta que de no suspenderse el trámite de nombramiento podría emitirse nuevos actos administrativos por parte del nominador que arraiguen la amenaza de mis derechos.

DERECHOS AMENAZADOS Y/O VULNERADOS

Considero Honorable Juez, que los accionados y con el Acuerdo CSJBOYA24-166 del 26 de noviembre de 2024, destinada a proveer el cargo de Secretario de Juzgado Municipal – Nominado, se me están vulnerando mis DERECHOS FUNDAMENTALES, al MINIMO VITAL, a la SEGURIDAD SOCIAL, al TRABAJO y al DEBIDO PROCESO Establecidos en los Arts. 25, 29, 48, 53 y 334 de la Constitución Política de Colombia y por ende me encuentro en debilidad manifiesta por circunstancias de salud por patología, como: PACIENTE ONCOLÓGICA, con citas de control cada tres meses o menos como lo dejaron plasmado los especialistas que atienden mi enfermedad; ojo derecho con diagnóstico OCLUSIÓN VASCULAR DE LA RETINA ANTIGUA, con orden de control e igualmente porque a la fecha y con mis 54 años me quedan tres años para cumplir con los requisitos de pensión y finalmente con un crédito por pagar con la Financiera Juriscoop.

ARGUMENTOS JURÍDICOS

Al entrar a estudiar este tema por la negación a mi derecho al Mínimo Vital y Móvil, ya que soy Servidora Judicial y a tres años para cumplir mi edad de Pensión con más de 30 años de servicio en provisionalidad, por mi situación de salud.

PROTECCIÓN LABORAL REFORZADA PARA PERSONAS CON CÁNCER Y ENFOQUE DE GÉNERO

Dice la Corte Constitucional en la sentencia T-326 de 2024, lo siguiente:

Dicho lo anterior, no es aceptable el argumento de que las entidades estatales no están obligadas a renovar contratos a personas en condición de debilidad manifiesta. En cambio, estas entidades deben demostrar la existencia de una causa objetiva y no discriminatoria que justifique la no continuación del contrato de prestación de servicios. Así mismo, en contratos de prestación de servicios celebrados por entidades estatales, es necesario hacer un análisis en el marco de las reglas bajo las cuales opera el sistema presupuestal y que rigen los procesos contractuales del Estado, a partir de las cuales pueden configurarse causales objetivas para la terminación de los referidos vínculos de prestación de servicios.

(...)

Existen personas que afrontan mayores dificultades no solo al momento de ingresar al trabajo, sino para permanecer en él. En el informe sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral colombiano, elaborado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en abril de 2020, se evidencian las significativas disparidades de género en el ámbito laboral. Este documento analiza detalladamente varios aspectos críticos de la inserción laboral femenina, destacando que, aunque las mujeres constituyen el 42.9% de la población económicamente activa en Colombia, su tasa de ocupación sigue siendo considerablemente inferior a la de los hombres, con un 41.4% frente a un 58.6%.

§133. Esa disparidad en las cifras de empleo de las mujeres frente a los hombres no es un dato menor (división sexual del trabajo). Evidencia no solo los obstáculos a los que se enfrentan al acceder al trabajo, sino que permiten advertir que afrontan mayores restricciones al encontrarse con un padecimiento de salud (segregación laboral). Como se destacó al inicio de esta providencia, existen datos que vinculan las mayores dificultades que afrontan las mujeres trabajadoras con un diagnóstico médico serio.

(...)

Por consiguiente, es esencial respetar y garantizar el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada con mayor intensidad frente a las mujeres, a fin de contrarrestar la forma en que el desempleo las afecta inequitativamente frente a los hombres. Esta perspectiva es necesaria no solo desde el punto de vista de los derechos humanos y la justicia social, sino también porque fomenta un entorno laboral más inclusivo y equitativo. Al hacerlo, se refuerza el principio de igualdad de oportunidades en el mercado laboral para todas las personas, sin distinción de género. (Resaltado fuera del texto original)

A su vez, en sentencia T-387 de 2018, se dijo:

“Las personas con sospecha o diagnóstico de cáncer merecen una protección constitucional reforzada: Alcance de los principios de integralidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud oncológicos.

17. Como desarrollo del principio de igualdad material consagrado en el artículo 13[46] constitucional, este Tribunal ha dispuesto reiteradamente que ciertas personas, debido a su estado de mayor vulnerabilidad y debilidad manifiesta, son sujetos de especial protección constitucional y, por lo tanto, merecedoras de especial protección en el Estado Social de Derecho.

Dentro de esta categoría, en desarrollo de los artículos 48[47] y 49[48] de la Carta, **la jurisprudencia constitucional ha incluido a las personas que padecen enfermedades catastróficas o ruinosas, como el cáncer[49]. Por esta razón, ha dispuesto que esta población tiene derecho a protección reforzada por parte del Estado, la cual se traduce en el deber de brindarles acceso sin obstáculos y al oportuno tratamiento integral para la atención de su patología.** En particular, sobre el alcance de esta protección, la Corte señaló en Sentencia T-066 de 2012 lo siguiente:

“Esta Corporación ha sido reiterativa en su deber de proteger aquellas personas que sufren de cáncer, razón por la cual ha ordenado a las entidades prestadoras del servicio de salud autorizar todos los medicamentos y procedimientos POS y no POS que requiere el tutelante para el tratamiento específico e incluso inaplicar las normas que fundamentan las limitaciones al POS (...)” (Subrayas fuera del original)[50]. (Resaltado fuera del texto original)

Afectación al mínimo vital: Fundamental dada su estrecha relación con la dignidad humana y con garantía al trabajo, a la seguridad social y a la vida digna.

El mínimo vital es un derecho fundamental ligado estrechamente con la dignidad humana, el cual se concreta en la posibilidad de contar con una subsistencia digna, pues “constituye la porción de ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud. Prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional” y encuentra su materialización en las diferentes acreencias laborales y prestacionales, que se deriven de la relación laboral. T-053/2014.

DERECHO AL MINIMO VITAL – Definición / DERECHO AL MINIMO VITAL – Requisitos para acreditar vulneración.

La jurisprudencia ha definido el mínimo vital y móvil como “aquella parte del ingreso del trabajador destinado a solventar sus necesidades básicas y del núcleo familiar dependiente, tales como alimentación, vivienda, salud, educación, recreación, servicios públicos domiciliarios, entre otras prerrogativas que se encuentran previstas expresamente en la Constitución Nacional y que además, posibilitan el mantenimiento de la dignidad del individuo como principio fundante del ordenamiento jurídico constitucional” T-174-2014.-

DERECHO AL MINIMO VITAL Y MOVIL:

El mínimo vital es un derecho que ha servido como herramienta para que proceda la acción de tutela en diferentes casos relacionados con el trabajador, que por alguna u otra razón se ve imposibilitado para obtener los recursos mínimos necesarios para subsistir.

Sentencia T-161/19

La corte constitucional ha definido el mínimo vital en los términos que se exponen a continuación:

El derecho fundamental al mínimo vital ha sido reconocido desde 1992[1] en forma extendida y reiterada por la jurisprudencia constitucional de la Corte como un derecho que se deriva de los principios de Estado Social de derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta, dado el carácter de derechos directa e inmediatamente aplicables de los citados derechos[2].

El objeto del derecho fundamental al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas constitucionalmente ordenadas con el fin de evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Este derecho fundamental busca garantizar que la persona, centro del ordenamiento jurídico, no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Tal derecho protege a la persona, en consecuencia, contra toda forma de degradación que comprometa no sólo su subsistencia física sino por sobre todo su valor intrínseco.

Es por ello que la jurisprudencia bajo el derecho fundamental al mínimo vital ha ordenado al Estado, entre otras, reconocer prestaciones positivas a favor de personas inimputables,[3] detenidas,[4] indigentes,[5] enfermos no cubiertos por el sistema de salud,[6] mujeres embarazadas[8]. Pero los jueces de tutela también han reprochado las acciones u omisiones, con fundamento en el derecho fundamental al mínimo vital, bien sea de particulares que presten algún servicio público como los servicios de salud y educación, o de particulares que atentan contra la subsistencia digna de una persona, con el fin de asegurar el mencionado derecho, como ha sucedido en materia del no pago prolongado de salarios o pensiones por empresarios particulares.[10], y ocasionalmente los particulares, cuando se reúnen las condiciones de urgencia[12] están obligados a suministrar a la persona que se encuentra en una situación en la cual ella misma no se puede desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones materiales de su existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano. Por su parte, respecto de la dimensión negativa, el derecho fundamental al mínimo vital se constituye en un límite o cota inferior que no puede ser traspasado por el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales que la persona necesita para llevar una existencia digna. Es por ello que institucionales como la inembargabilidad de parte del salario, la prohibición de la confiscación, la indisponibilidad de los derechos laborales o el amparo de pobreza, entre otros, constituyen ejemplos concretos del mencionado límite inferior que excluye ciertos recursos materiales de la competencia dispositiva del Estado o de otros particulares. Lo anterior conduce a la estrecha relación existente entre Estado Social de derecho, mínimo vital y régimen tributario.

El Estado no puede, al ejercer la potestad tributaria, pasar por alto si está creando tributos que ineludible y manifiestamente impliquen traspasar el límite inferior constitucionalmente establecido para garantizar la supervivencia digna de la persona, dadas las políticas sociales existentes y los efectos de las mismas. Esta limitante se ha expresado tradicionalmente en la prohibición de los impuestos confiscatorios (art. 34 de la C.P.). Pero también es especialmente relevante para el caso el derecho fundamental al mínimo vital, en particular el de las personas que apenas cuentan con lo indispensable para sobrevivir (art.

13 de la C.P.). En cumplimiento de los fines que explican su existencia (art. 2° de la C.P.), el Estado está obligado a propender por la creación y mantenimiento de las condiciones materiales necesarias para que una persona pueda sobrevivir dignamente; en determinadas circunstancias de urgencia, gran peligro o penuria extrema, y en otras señaladas en las leyes, está a su vez obligado a garantizar tales condiciones, usualmente de manera temporal, para evitar la degradación o el aniquilamiento del ser humano.

El derecho fundamental al mínimo vital, concretamente en lo que se refiere a las condiciones materiales básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y autónoma, constituye un límite al poder impositivo del Estado y un mandato que orienta la intervención del Estado en la economía (artículo 334 C.P.). La intersección entre la potestad impositiva del Estado y el principio de Estado Social de derecho consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este mínimo constituye el contenido del derecho fundamental al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales para que la persona humana pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria. Si bien el deber de tributar es general pues recae sobre “la persona y el ciudadano” (art. 95-9 de la C.P.), el derecho al mínimo vital exige analizar si quien no dispone de los recursos materiales necesarios para subsistir digna y autónomamente puede ser sujeto de ciertas cargas fiscales que ineludible y manifiestamente agraven su situación de penuria[14]. Entonces, las personas que apenas disponen de lo necesario para subsistir son las que tienen menor capacidad contributiva, o, inclusive, las que pueden carecer de capacidad económica de tributar. Llamar a quienes carecen de capacidad contributiva a soportar estas cargas públicas de orden impositivo que las afecta de manera ineludible y manifiesta en su subsistencia, resulta contrario a la justicia tributaria. La capacidad económica o contributiva, fundada, por ejemplo, en el ingreso, en la riqueza, o en una actividad productiva, no puede ser equiparada a la realización de una actividad social básica e ineludible, como adquirir un bien o servicio indispensable para sobrevivir.

ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PREPENSIONADOS EN CARGOS PROVISIONALES SOMETIDOS A CONCURSO DE MÉRITOS.

La Sección Segunda del Consejo de Estado explicó cómo opera la estabilidad laboral reforzada de personas próximas a pensionarse que ocupan cargos en provisionalidad sometidos a concurso público de méritos.

Según la providencia, cuando un funcionario ocupa en provisionalidad un cargo de carrera y es además sujeto de especial protección constitucional concurre una relación de dependencia intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos fundamentales, especialmente el mínimo vital y la igualdad de oportunidades.

Es importante resaltar que los sujetos de especial protección son las madres o padres cabeza de familia, los funcionarios que están próximos a pensionarse o los funcionarios que padecen alguna discapacidad física, mental, visual o auditiva.

Acorde con la jurisprudencia precedente, el alto tribunal administrativo enfatizó que la eficacia de los derechos indicados depende del reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de ponderación entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa. Con todo, concluyó que cuando el cargo ocupado por una persona próxima a pensionarse es ofertado en un concurso de méritos entran en tensión los derechos del aspirante que superó el concurso para acceder al cargo y la

protección de los derechos del pre pensionado, por lo que no es posible resolverse únicamente a favor de alguno.

Por el contrario, se debe realizar una ponderación de los derechos que no afecte el núcleo esencial de ninguno de los dos, de tal manera que debe efectuarse un examen objetivo de las circunstancias del caso y cuando no se haya provisto todos los cargos por el concurso debe adoptarse la acción razonable para la protección correlativa de los derechos (C.P. Rafael Francisco Suárez)

Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia 88001233300020160006001, Abr. 20/17 **PREPENSIONADOS NO PUEDEN SER DESVINCULADOS POR EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO O PRESUNTIVO.**

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional precisó, a través de una sentencia de tutela, que los pre pensionados no pueden ser desvinculados por el vencimiento del plazo pactado o presuntivo. Así lo recordó al amparar los derechos fundamentales al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y a la seguridad social de un trabajador que fue desvinculado del servicio por expiración del plazo presuntivo, a pesar de tener conocimiento de que le faltaban menos de tres años para lograr cumplir con los requisitos de acceso a la pensión de vejez.

la pensión de vejez. Definición Según el alto tribunal, adquieren la condición de pre pensionados, y la protección reforzada que de esta se deriva, las personas próximas a pensionarse en el contexto de los procesos de renovación de la administración pública, esto es, el servidor público que le falten tres o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez. Por otro lado, afirmó que el fundamento del reconocimiento de esta estabilidad laboral no se circunscribe al retén social, sino que se origina en mandatos especiales de protección regulados en la Constitución Política y del principio de igualdad material que ordena dar un trato especial a grupos vulnerables. Afectación a garantías constitucionales.

Acorde con lo precedente, la corporación aseguró que la condición de pre pensionado no es suficiente para ordenar el reintegro de un trabajador, puesto que es necesario demostrar que esta desvinculación está poniendo en riesgo los derechos fundamentales del accionante. Finalmente, determinó que el derecho a la estabilidad reforzada se concreta en la garantía de no desvinculación del servicio, por el simple cumplimiento del plazo pactado o presuntivo como causa suficiente de terminación. Y en el evento en que ocurra tal desvinculación se deberá ordenar el reintegro de los trabajadores próximos a pensionarse, siempre y cuando esta finalización de la relación signifique una afectación de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, verificable por el hecho de que el sustento del trabajador provenía del salario que percibía (M. P. Jorge Iván Palacio). Corte Constitucional, Sentencia T-357, jul. 06/16

Es posible concluir que, al proceder mi desvinculación de la Rama Judicial, estando en proceso mis controles como paciente Oncológica, donde puedo demostrar que deben hacerse cada tres meses, por especialista Oncológico y Gastroenterólogo Oncológico, con Oclusión Vascular de la Retina Antigua de mi ojo derecho, pues se presume la afectación del mínimo vital de un trabajador. La estabilidad laboral reforzada y/o reten social que opera para mi caso por circunstancias de salud, no solo está dirigida en favor del trabajador, sino que ampara igualmente a todos los que dependan de él.

Por todo lo expuesto, solicito la protección a mis derechos fundamentales especialmente al mínimo vital, los cuales se pueden ver vulnerados por la Rama

Judicial al desvincularme de la entidad sin antes haber realizado el estudio a fondo de mi situación de salud, lo que implica la violación a mi mínimo vital , ya que sin salario no tendría la oportunidad de continuar con mis controles del cáncer que padezco, donde como lo indica el Oncólogo y Gastroenterólogo Oncológico que son controles luego de la cirugía, según los protocolos, donde manifiestan que según la evolución puede requerir de controles más frecuentes por cinco años, que si no cuento con mi salario no lo podría hacer y posiblemente afectaría notablemente mi salud.

PETICIONES

PRIMERO: Tutelar a mi favor los Derechos Fundamentales al MINIMO VITAL, a la SEGURIDAD SOCIAL, al TRABAJO, al DEBIDO PROCESO, a la FAMILIA, establecidos en los Arts. 25, 29, 48, 53 y 334 de la Constitución Política de Colombia, para evitar un perjuicio irremediable de afectación del mínimo vital y demás derechos fundamentales ORDENANDO al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOYACÁ Y CASANARE y al JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE, según corresponda, dejar sin efecto el Acuerdo CSJBOYA24-166 del 26 de noviembre de 2024, y con el cualquier proceso encaminado a proveer el cargo de Secretario de Juzgado Municipal – Nominado, y así evitar un perjuicio irremediable, hasta tanto logre reunir todos los requisitos que me permitan acceder a una pensión por vejez, y se logre mi correspondiente inclusión en nomina de pensionados.

SEGUNDO: Ordenar al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA BOYACÁ Y CASANARE y al JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE TAMARA CASANARE, se me mantenga de forma transitoria en el cargo que vengo desempeñando hasta tanto logre reunir todos los requisitos que me permitan acceder a una pensión por vejez, y se logre mi correspondiente inclusión en nómina de pensionados, garantizando así mis derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso, por debilidad manifiesta por circunstancias de salud y a la familia, por ser el municipio de Támara – Casanare el lugar donde nací, crecí y mantengo mi núcleo familiar.

PROCEDENCIA Y LEGITIMIDAD

Esta Acción de Tutela es procedente de conformidad con lo establecido en los artículos 1,2, 5, y 9 del Decreto 2591 de 1991 ya que lo que se pretende es que se garanticen mis derechos fundamentales especialmente al mínimo vital, la seguridad social y las garantías laborales.

COMPETENCIA

Por el domicilio del Accionado, es Usted competente Señor Juez para conocer la presente acción de tutela.

MANIFESTACION EXPRESA

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he interpuesto acción de tutela por los mismos hechos ante autoridad competente.

PRUEBAS

Presento como tales, las siguientes:

1. Copia de mi cédula de ciudadanía.

2. Certificado Laboral
3. Copia de mi historia Clínica como paciente Oncológica
4. Copia Historia Clínica de Gastroenterólogo Oncológico
5. Copia Historia clínica sobre enfermedad ocular de mi EPS y Clínica Barraguer
6. Copia de la Certificación bancaria de crédito.
7. Resumen de semanas cotizadas en COLPENSIONES
8. Oficio CSJBOYO25-2266, del 12/05/2025
9. Acuerdo CSJBOYA24-166 del 26 de noviembre de 2024

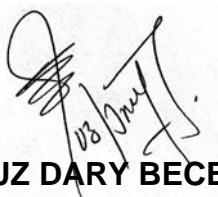
ANEXOS

Las mencionadas como pruebas.

NOTIFICACIONES

- La Suscrita recibe notificaciones en el correo luzdary201070@hotmail.com , Celular 3114621243.
- Al Consejo Seccional de la Judicatura Boyacá y Casanare en el correo electrónico scrconsecjudboyecas@cendoj.ramajudicial.gov.co
 - Al Juzgado Promiscuo Municipal de Támara-Casanare, al correo electrónico j01prmpaltamara@cendoj.ramajudicial.gov.co

Agradeciendo la protección de mis derechos fundamentales.
Se suscribe,



LUZ DARY BECERRA BARRERA

C.C.N° 24.143.901

Teléfono: 3114621243

Correo electrónico luzdary201070@hotmail.com